

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Auto N° 120

MAGISTRADA PONENTE (E): PAOLA ANDREA GARTNER HENAO

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-021-2023-00163-01
DEMANDANTE:	EPS SURAMERICANA S.A. notificaciones@gha.com.co
DEMANDADO:	NACION- RAMA JUDICIAL- DESAJ dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO	APELACION DE AUTO/ DECRETO PROBATORIO/ CONFIRMA

I. CUESTION PREVIA

La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está conformada por los Despachos 13, 14 y 15 y fungen como titular de los mismos los magistrados Guillermo Poveda Perdomo, Paola Andrea Gartner Henao y Katia Alexandra Domínguez Garcés, respectivamente.

El 28 de enero de 2025, la Sala Plena del Consejo de Estado, aceptó la renuncia del doctor Guillermo Poveda Perdomo al cargo de magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con efectos fiscales a partir del 20 de febrero de 2025, lo que conllevó a que mediante Oficio CE-PRESIDENCIA-OFI-INT-2025-235 del 29 de enero de 2025, comunicado el mismo día, se designara a la doctora Gartner Henao como encargada del Despacho 13 (anterior titular, el doctor Poveda Perdomo).

Teniendo en cuenta lo anterior, la magistrada Paola Andrea Gartner Henao fungiría como titular de dos despachos de la misma sala de decisión, hasta tanto el Consejo de Estado nombre un nuevo magistrado como titular del Despacho 13 de esta Corporación.

Puesto en conocimiento este escenario, se advierte a las partes procesales que la presente providencia, será firmada únicamente por las magistradas Paola Andrea Gartner Henao como encargada del Despacho¹³ y la doctora Katia Alexandra Domínguez Garcés como titular del Despacho 15 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, situación que no afecta el quorum decisorio de esta Sala de Decisión.

II. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante contra el auto N° 752 del 22 de julio de 2024, proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, que negó la prueba testimonial y la declaración de parte solicitadas por el demandante.

III. ANTECEDENTES¹

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la EPS SURAMERICANA S.A. demandó a la NACION-RAMAJUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, con el propósito de que se declare la nulidad de los Actos Administrativos contenidos en la (i) Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Cali notificada el 16 de febrero de 2022; en la (ii) Resolución No. DESAJCLR22-2806 21 de septiembre de 2022 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Cali notificada el 21 de septiembre de 2022; y, la (iii) Resolución No. RH 5931 del 21 de noviembre de 2022 mediante la cual se resolvió los recursos interpuestos contra la Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA²

El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, en el auto N° 752 del 22 de julio de 2024, indicó que, por ser un asunto de pleno derecho, las pruebas tales como testimonios e interrogatorios o declaraciones de parte resultan ser

¹ [76-001-33-33-021-2023-00163-00 - OneDrive](#) Archivo 0004. Demanda y poder especial.

² [76-001-33-33-021-2023-00163-00 - OneDrive](#) Archivo 0010.

inconducentes, en la medida en que el debate se contrae a establecer la legalidad de un acto.

IV. RECURSO DE APELACION

Contra dicha decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación argumentando que se desconoció el objeto principal de dichas pruebas, que eran demostrar como es el funcionamiento real de la solicitud de recobro que deben efectuar las entidades públicas a las EPS, puesto que la entidad demandada no ha realizado los procedimiento de recobro a la EPS en debida forma y ha expedido unos actos administrativos que se encuentran viciados de nulidad.

Indico que, tanto las declaraciones de parte como la prueba testimonial son conducentes, ya que su finalidad es demostrar la aplicación de los procedimientos para efectuar el recobro de prestaciones económicas. Además, expuso que la negativa de la práctica de las pruebas vulnera el derecho de contradicción y de defensa, por lo que se solicita que se decreten y ordenen dichas pruebas, las cuales fueron solicitadas en su oportunidad procesal.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación y es competencia, en segunda instancia, el Tribunal para desatarlo. La referida norma señala:

Art. 243.- *Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:*

(...)

7. el que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

5.2. Problema jurídico

El presente asunto se contrae en determinar si es procedente acceder al decreto y a la práctica de la declaración de parte y los testimonios solicitados por la parte demandante.

5.3. Marco jurídico aplicable al caso

En materia probatoria, el artículo 211 del CPACA establece, para los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en ese Código, la aplicación de las normas del CPC³, hoy CGP⁴.

En primer lugar, es importante señalar que la prueba constituye un recurso procesal que facilita al juez formar su convicción acerca de los hechos en disputa, lo que le permite tomar una decisión sobre los problemas jurídicos planteados.

El artículo 165 del CGP, menciona cuales son los medios de prueba que pueden ser utilizados por las partes dentro del proceso y por remisión expresa del artículo 211 del CPACA., dispone que:

«ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.»

Por lo tanto, las partes tienen la posibilidad de utilizar estos medios de prueba en el proceso para persuadir al juez sobre el tema en cuestión. Esto debe hacerse después de analizar la necesidad de cada medio probatorio, asegurando que se cumpla con el debido proceso y que los mismos sean conducentes, pertinentes y útiles al momento de ser solicitados.

En efecto, el juez, a la hora de realizar la fijación del litigio, debe determinar si los medios probatorios solicitados por las partes son adecuados para demostrar el hecho objeto de controversia, dicho requisito, ha sido analizado por el Consejo de Estado: (i) como presupuesto para que el juez verifique los requisitos extrínsecos de

³ Código de Procedimiento Civil.

⁴ Código General del Proceso.

la prueba y; (ii) como elemento que auspicia el ejercicio del derecho de contradicción de la contraparte. En auto del 28 de mayo de 2013 razonó⁵:

<<(…) Sobre esa materia [enunciación del objeto de la prueba testimonial] resulta de la mayor importancia destacar que la exigencia que consagra el citado artículo 219 del Código de Procedimiento Civil debe observarse de manera rigurosa, en primer lugar porque sólo en cuanto el solicitante enuncie, indique, señale o precise cuál es el objeto del testimonio cuyo decreto y práctica requiere, **el juez podrá efectuar entonces una valoración razonada acerca de la eficacia, la pertinencia y la conducencia de dicha prueba**; de otra manera, si el juzgador desconoce por completo cuál es el objeto o la finalidad para la cual el solicitante pretende el recaudo de este medio de acreditación, mal podrá concluir acerca de su procedencia en atención a la definición que necesariamente debe realizar respecto de los factores que se dejan mencionados y que, como ya se vio (sic), ante la ausencia de uno o varios de ellos (legalidad, eficacia, conducencia o pertinencia) el artículo 178 del mismo Código de Procedimiento Civil determina, de manera imperativa, el rechazo in limine de la prueba correspondiente.

En segundo lugar, porque sólo en cuanto la parte solicitante enuncie, señale o precise el objeto de la prueba, esto es la indicación de los hechos acerca de los cuales ha de versar la declaración del testigo, **la parte contraria podrá entonces ejercer a plenitud su derecho de defensa**; ello porque sólo con el conocimiento suficiente acerca del objeto de la prueba podrá pronunciarse razonadamente, cuando a ello haya lugar, acerca de la legalidad, la eficacia, la conducencia y la pertinencia de la prueba requerida, con anterioridad a la adopción de la decisión correspondiente; sólo con ese conocimiento podría impugnar, de manera razonada y seria, la decisión por cuya virtud se hubiere dispuesto el decreto y práctica de la prueba en cuestión y, además, sólo a partir de dicho conocimiento podrá preparar de manera adecuada y previa su defensa para efectos de contrainterrogar al testigo respecto de los hechos que constituyan el objeto de la prueba, en el momento en que se lleve a cabo la diligencia de recepción del testimonio.(…)»(Subrayado y negrilla de la Sala)

5.5. Caso concreto

En primer lugar, la Sala aclara que, de acuerdo con el artículo 168 del Código General del Proceso, que resulta aplicable al caso por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se establece claramente que el juez debe rechazar «las pruebas

⁵ Sección Tercera, Subsección A. MP: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 11001-03-26-000-2010-00018-00 (38455).

ilícitas, las que sean claramente impertinentes, inconducentes o evidentemente superfluas o inútiles.»

Ahora bien, atendiendo el caso concreto, el actor solicitó el decreto de la siguiente prueba testimonial y declaración de parte:

« 1. *Declaración de Parte a.* Comedidamente se solicita la declaración del Representante legal de EPS SURAMERICANA S.A., con el fin de que se sirva declarar todo lo que le conste con relación a los hechos de esta demanda, en especial lo concerniente al trámite de cobro de prestaciones económicas derivadas de incapacidad y licencias de maternidad y/o paternidad. El doctor GÓMEZ DOMINGUEZ, se podrá citar en la calle 64 Norte NO 58-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia), Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 23291, dirección electrónica jgomezd@sura.com.co b. Comedidamente se solicita la declaración del doctor CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, con el fin de que se sirva declarar todo lo que le conste con relación a los hechos de esta demanda, en especial lo concerniente al trámite de cobro de prestaciones económicas derivadas de incapacidad y licencias de maternidad y/o paternidad. La doctora RAMÍREZ SIERRA, se podrá citar en la Carrera 10 No. 12-15 Torre B piso 17, Teléfono: 8986868 Ext: 1406, dirección electrónica jgomezd@sura.com.co

2. *Testimonial* Comedidamente se solicita la declaración del señor DIEGO FERNANDO RONDÓN CANO, con el fin de que se sirva declarar todo lo que le conste con relación a los hechos de esta demanda, en especial lo concerniente al trámite de cobro de prestaciones económicas derivadas de incapacidad y licencias de maternidad y/o paternidad. El doctor RONDÓN CANO, se podrá citar en la calle 64 Norte N O 5B-h46 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia), Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 2329i, dirección electrónica dfrondon@sura.com.co»

A consideración de esta Sala, el análisis expuesto por el A-quo es acertado, ya que el asunto objeto de controversia versa sobre declarar la nulidad de los Actos Administrativos contenidos en la (i) Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022; (ii) Resolución No. DESAJCLR22-2806 21 de septiembre de 2022; y, la (iii) Resolución No. RH 5931 del 21 de noviembre de 2022 mediante la cual se resolvió los recursos interpuestos contra la Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, los cuales la entidad demandada ordenó a la EPS Suramericana S.a. EPS SURA, el reintegro de la suma de dinero, por concepto de aportes al sistema general de seguridad social en salud, prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad o paternidad, correspondientes a la vigencia 2020.

Como se visualiza, la solicitud de prueba testimonial y declaración de parte se torna inconducente a la hora de demostrar asuntos de pleno derecho, ya que, en los términos en que quedó fijado el litigio, la controversia en este caso gira en torno a puntos no susceptibles de ser demostrados a través de la prueba en cuestión.

Al momento de determinar la pertinencia y conducencia de la prueba, el juez debe llevar a cabo un análisis para comprobar si existe una relación directa entre el objeto de la controversia y la prueba solicitada, y así decidir si esta es idónea dentro del proceso. Sin embargo, el objeto de este debate se centra en establecer la legalidad de un acto, así como en verificar que tanto el procedimiento como su contenido se ajusten a la ley. En este sentido, tal como lo señaló el A quo, el interrogatorio de parte y los testimonios resultan inconducentes, ya que no aportan nada relevante a la litis, dado que el hecho que se pretende probar puede ser acreditado mediante la revisión de los antecedentes y el contenido de la actuación.

Así las cosas, se confirmará la decisión del Auto Interlocutorio N° 752 del 22 de julio de 2024, proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, la cual negó la prueba testimonial y la declaración de parte solicitada por el demandante.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala Quinta de decisión;

RESUELVE

PRIMERO- CONFIRMAR el auto N° 752 proferido el 22 de julio de 2024, por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente electrónico al juzgado de origen para lo de su cargo, previo registro de la actuación en SAMAJ.

El presente documento es suscrito electrónicamente en la plataforma <https://samairj.consejodeestado.gov.co/> en donde se puede verificar su autenticidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firma electrónica)
PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Magistrada E.



(firma electrónica)
KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS
Magistrada

DSM